JUAN LUIS CASTELLANO CASTELLANO

Regionalismo y nación en el siglo XVIII

Frente al Estado medieval, considerado como un medio para la realización de otros valores (por ejemplo, el derecho), se va formando a lo largo de la Edad Moderna un estado, concebido «organismo ético» para el logro de los más altos bienes y consecuentemente válido en sí. Los actos del estado siempre se creen (o tratan de hacerse creer) justos porque, si tal estado está bien ordenado, su fin coincide con el interés de los ciudadanos (1); así el estado puede actuar por razones propias más allá de consideraciones de cualquier otro tipo. La teoría en este sentido parece estar clara, al menos para los más importantes pensadores políticos, y, si se acepta, cualquier fenómeno de la vida (social) puede explicarse por la famosa razón de estado que, según su más célebre estudioso moderno, consiste en «reconocerse a sí mismo y a su ambiente y en extraer de este conocimiento las máximas del obrar» (2). Pero el pensamiento político es una cosa y la práctica es, o puede ser, otra; por tanto, parece oportuno tratar de ver cómo es el estado y por qué puede parecer justa su actuación, cuando de hecho no siempre lo parece. Interesa ver esta cuestión para situar nuestro trabajo en un contexto adecuado.

El estado absolutista, que tantos nombres ha recibido, si quiere lograr una independencia, por muy relativa que sea, tiene que presentarse como un todo más o menos independiente de los poderes supranacionales y también de todos aquellos poderes nacionales, si así puede decirse, que de alguna manera le restan poder a este todo en principio representativo de la nación. Para conseguir independencia de cualquier otro poder y para conseguir la unidad hacen falta una fuerza —no sólo moral— y una centralización. Fuerza y centralización son,

(1) HEGEL, *La razón de la historia*, Madrid, 1972, pág. 114.

(2) MEINECKE, *La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna*, Madrid, 1959, pág. 3.

pues, factores determinantes de la configuración del estado absolutista. Fuerza y centralización son los factores necesarios para conseguir la unidad nacional y quizá también, por paradójico que parezca, los que pueden retardar esta unidad nacional; una unidad que tiene que ver mucho con el hecho de que varios reinos se encuentren englobados en un mismo estado, al frente del cual se encuentra el rey (la monarquía generalmente se considera la forma superior de gobierno y puede decirse que es casi la obligada). El sentimiento nacional, patente ya desde antes del siglo XVI, lleva en sí implícito una cierta idea de unidad —todos bajo un estado, todos bajo un rey y, a veces, todos bajo una ley— que se manifiesta bastante bien frente al extranjero, pero igualmente —puesto que conserva su significado tradicional— implica un factor de diferenciación muy favorecido por los grupos de mentalidad tradicional (3).

El estado moderno requiere un espacio mayor, a ser posible más poblado y todo lo perfectamente delimitado que sea factible; esto lleva a una nueva concepción de la frontera. La frontera no tiene sólo una función militar; implica «la línea de delimitación de un sistema de poder que se define como unidad» (4), que debe ser suficiente en sí mismo —en el terreno económico el mercantilismo será un factor de unificación— y que debe englobar a todos los pueblos que tengan algo en común con referencia al estado, cosa que en gran medida sólo puede conseguirse mediante las armas —está casi siempre justificado por los teóricos políticos—.

La consolidación del estado en el interior, la defensa del estado frente al exterior, la necesidad de un espacio mayor y otros muchos factores, entre los cuales pueden tener cabida los llamados intereses dinásticos o la política de hegemonía, llevan continuamente a la guerra; el estado moderno necesita la fuerza para vivir, y principalmente encuentra la fuerza en el ejército. El ejército es uno de los rasgos característicos del estado absolutista señalado por todos los historiadores; el poder central mantiene un ejército (mercenario o menos mercenario) propio al servicio, si puede decirse así, de su propio poder liberado de este modo en buena parte de los vínculos feudales. En función del ejército (y de la guerra), aunque no sólo en este sentido, se reestructuran bastantes «elementos» del estado, o bien se introducen otros nuevos. El ejército requiere la unificación del poder y la centralización administrativa, que llevará consigo el establecimiento de una capital y la creación de una fuerte burocracia, el otro elemento del estado absolutista casi indefectiblemente señalado en la historiografía sobre el tema. Quizá lo más importante de la burocracia es el hecho de que «los cargos públicos no están ya directamente enlazados con la calidad de sus titulares en cuanto individuos de clases “castas”, sino que revisten progresiva-

(3) MARAVALL, *Estado moderno y mentalidad social*, Madrid, I, pág. 471.

(4) *Ibid.*, I, pág. 121.

mente el carácter de *funciones políticas* del estado... El ejercicio de esas funciones no aparece, pues, como una realización de los intereses, económicos y políticos, de sus titulares, sino como el ejercicio de las funciones del Estado que representa el interés general» (5). El mantenimiento del ejército y de la burocracia impone una reestructuración de todo el sistema fiscal con el fin inmediato de sacar más recursos para el estado; una fiscalidad hasta cierto punto nueva que, en principio, coadyuva a la centralización (6).

Si todo se hubiera desarrollado de acuerdo a este esquema del estado absolutista, excesivamente simple, habría un momento en el que conforme se fuera avanzando en el centralismo (y el absolutismo) se llegaría a la identificación, o casi, de estado-nación-interés general-interés particular; así desaparecerían todas las contradicciones, pues la idea de nación se vería como un valor eterno, cuya conservación depende del estado, representante del interés de todos y cada uno. Los poderes que se opusieran al estado no tendrían razón de ser, ya que van en contra de la nación y del interés de todos y cada uno —siendo «cada uno» igual a todos en la esfera del estado—. De este modo, tratan de verlo bastantes teóricos del siglo XVIII (español) y de este modo tratan de verlo muchos estudiosos en nuestros días, llevados tal vez por la imagen demasiado frecuente de una centralización excesiva, por la idea de igualdad (política) y por el auge extraordinario que el «sentimiento» nacional, aunque con significados muy diversos, adquiere en el siglo pasado y en el presente.

Ahora bien, nada se desarrolla de acuerdo con un esquema y mucho menos de acuerdo con éste que sitúa al estado por encima de las relaciones sociales, que desde luego son de clase, mejor dicho de lucha de clases. Para ver el papel desempeñado por el estado (nacional) y por el regionalismo debe verse cómo se desarrollan estas categorías —teniendo en cuenta el pensamiento de los contemporáneos— y cuál es la función que ocupan en el contexto de la lucha de clases, una función que lógicamente varía con el tiempo.

En principio, puede decirse que la función progresista del centralismo es indudable, que este centralismo se apoya en la monarquía, que beneficia a la burguesía que toma conciencia, o empieza a tomar conciencia, de sí misma a escala de un gran estado nacional y concluir con Lublinskaya: «La burguesía era monárquica no sólo por tradición, sino en virtud de que, sin la ayuda del

(5) POULANTZAS, *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, Madrid, 1972, página 208.

(6) El Estado moderno en su afán centralizador pretendía uniformar fiscalmente todo el territorio nacional, siguiendo así una política mercantilista; en la realidad este afán se vio coartado, tanto en España como fuera de ella, por las necesidades cada vez más apremiantes de numerario por parte del estado y la resistencia de ciertas zonas geohistóricas beneficiadas en el conjunto. Por ello, a pesar de su deseos, el estado se ve forzado a mantener la antigua descentralización y, en algunos casos, a aumentarla; el Imperio español es buena prueba de ello.

absolutismo, su desarrollo y hasta su existencia chocaban con grandes obstáculos que ella aún no podía sortear» (7). Los comienzos de la Edad Moderna evidencian en España que el estado cumple esta función y la burguesía la ve con agrado; efectivamente, los Consejos favorecen el absolutismo regio en sus distintos territorios, un absolutismo que por ahora nada tiene en contra de las peculiaridades regionales, de las cuales los Consejos no eran, ni mucho menos, sus defensores; una función más centralizadora y probablemente más en apoyo de la burguesía, desempeñan los secretarios y la alta burocracia que pulula a su alrededor. Sabemos, sin embargo, que bien pronto esta alta burocracia adquiere espíritu de casta, demasiado unida a la nobleza, cuyos intereses en gran medida comparte (8), y que los Consejos ya en el reinado de Carlos II «intentarán erigirse en representantes calificados de la tradición foral para oponerse a toda reforma, aún la más mínima» (9). Entre tanto se había producido el intento reformista (administrativamente) de algunos validos, muy especialmente del Conde-Duque, donde alienta un clarísimo sentimiento nacional, ya de un modo muy claro de unidad nacional: «Tenga V. Majd. por el negocio más importante de la Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente V. Majd. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia en todo aquello que mira a dividir límites, puertos secos, el poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y Portugal en la parte que quisiere, a poder introducir V. Majd. acá y allá ministros de las naciones promiscuamente y en aquel temperamento que fuere necesario en la autoridad y mano de los consellers, jurados, diputaciones y consejos de las mismas provincias en cuanto fuesen perjudiciales para el gobierno y indecentes a la autoridad real en que se podrían hallar medios proporcionados para todo, que si V. Majd. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo» (10); este intento de unidad nacional en ningún caso implica colonialismo castellano como manifiesta el mismo Olivares en 1632: «... la diferencia sin causa con que han querido tratar las naciones de España ha sido perjudicialísimo al servicio de V.M. y a la conservación de la misma monarquía, y que será su total ruina el permitirlo, sino que en decir españoles se entiende que no hay diferencia de esta a aquella nación de las que comprende los límites de España. Lo mismo que los Catalanes entiende cuanto a los Portugueses» (11). Como es bien sabido, Olivares intenta una serie de medidas uniformes a toda

(7) *La crisis del siglo XVII y la sociedad del absolutismo*, Barcelona, 1979, pág. 208.

(8) Quizá pueda hablarse de una «traición» de la burguesía desde fines del siglo XVI (o antes), véase Braudel, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, Madrid, 1976, II, págs. 98 y ss.

(9) VICENS, «Estructura administrativa y estatal en los siglos XVI y XVII», en el vol. *Coyuntura económica y reformismo burgués*, Barcelona, 1974, pág. 127.

(10) «Gran memorial» en *Memorias y cartas del Conde-Duque de Olivares*, Madrid, 1978, pág. 96.

(11) Cit. por ELLIOT, *La rebelión de los catalanes, 1598-1640*, Madrid, 1977, págs. 182-183.

España, común entonces entre los hombres de su época, de la cual la más importante es la Unión de Armas, en la que se ha querido ver con frecuencia la materilización de la ideología política del Conde-Duque; a fortiori esta interpretación deja bastante que desear: Olivares renuncia a su idea de estado-nación (península Ibérica) conservando únicamente la pretensión de repartir de un modo más equitativo las cargas entre las distintas partes del Imperio, según había sugerido, por ejemplo, ya Fernández Navarrete (12).

Repetidamente se ha relacionado la relativa independencia de cada una de las partes de la monarquía española con su autonomía en materia hacendística, que siempre defendieron con tesón. Sin duda, la presión fiscal del imperio castigó a Castilla más que a cualquier otra región; «en el comportamiento de los demás países hay diferencias cuyo fundamento es el distinto grado de la autoridad real, en razón inversa con la que conservaban las instituciones representativas provinciales. Portugal y Cataluña se negaron tenazmente a contribuir a las necesidades supraestatales, como si lo que ocurriera fuera de sus fronteras no les afectase en nada. Navarra, Aragón y Valencia suministraron ocasionalmente pequeñas cantidades» (13). La justa comprensión de la desigualdad fiscal de las distintas regiones requiere algunas puntualizaciones: 1. Dentro de Castilla existían auténticos paraísos fiscales que, si bien pueden tener su justificación en el siglo XVII (14), no parece tengan una justificación medianamente razonable para el siglo XVIII (15); 2. Castilla se benefició más que cualquier otra región del Imperio, al menos en sus comienzos; 3. La desigualdad contributiva (regional) no desaparece con la abolición de los fueros: Kamen señala cómo en la Corona de Aragón la tributación era «más ligera que la de Castilla» (16) y D. Carmelo Viñas y Mey, siguiendo a Larruga, indica la desigualdad fiscal dentro de la España dieciochesca: «Todavía, a pesar de que en virtud de la desaparición de los regímenes forales éstos contribuían más intensamente, un vecino de Valencia tributaba con unos nueve pesos; un aragonés con cinco; un catalán con trece, y un toledado con cuarenta y cuatro» (17); aún Florindablanca se quejará de la falta

(12) Cfr. *Conservación de monarquías* en BAE, t. XXV, pág. 496.

(13) DOMINGUEZ ORTIZ. *Política y hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1960, pág. 165.

(14) *Ibid.*, pág. 160.

(15) El caso siguiente es bastante significativo de los beneficios fiscales que podía reportar una relativa autonomía gubernamental. «Castro Urdiales envidiaba los privilegios de su vecina Vizcaya y aspiraba a entrar en el Señorío, como en la Edad Media lo había hecho Valmaseda. Mediante un *servicio* de 140.000 escudos consiguió la incorporación por real decreto de 23 de septiembre de 1738. Pero Bilbao protestó, temiendo su competencia portuaria, y el Consejo de Hacienda representó que resultaba lesivo, por lo que dos años después se revocó la concesión» (DOMINGUEZ ORTIZ, *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Barcelona, 1976, pág. 154). Acerca del carácter privilegiado de Navarra en el conjunto nacional, vid. ARTOLA, «La Hacienda Real de Navarra en el Antiguo Régimen», *Hacienda Pública Española*, 55, págs. 131-146.

(16) *La guerra de Sucesión en España, 1700-1715*, Barcelona, 1974, pág. 413.

(17) *El problema de la tierra en la España de los siglos XVI-XVII*, Madrid, 1941, pág. 88.

de uniformidad fiscal entre las coronas de Aragón y Castilla (18), imposible de conseguir en todo el Antiguo Régimen. 4. Finalmente, el hecho de que Castilla fuese la que más pagara el erario no es demasiado significativo a la hora de estudiar regiones/nación, a no ser que se caiga en la idea extraordinariamente simple de que todas las categorías sociales tiene idéntica visión de un mismo problema; sin duda, un artesano catalán contribuía menos a la corona que un castellano, pero en opinión de Elliot no pagaba muchos menos impuestos (19); una situación parecida señala Bourke: «Todos estos descontentos que uno ve en los reinos de Valencia y Cataluña, no pueden quejarse del Rey, que no les pide nada; así que todos sus agravios se originan sólo en la dureza de sus señores, quienes les aplastan con tasas y tributos» (20).

Es probable que el centralismo fiscal del XVIII contribuyera de algún modo a fomentar, o mantener, una cierta conciencia regional en aquellas partes de la monarquía española, que, debido a la abolición de los fueros, se veían obligadas a contribuir en un grado mayor a las necesidades de un estado relativamente centralizado. De hecho, las quejas contra la imposición se hacen ahora más frecuentes en los países de la Corona de Aragón; quejas por demás continuadas, como es bien sabido, a lo largo de todo el Antiguo Régimen en las distintas regiones. De cualquier modo, la fiscalidad no es más que uno de los muchos aspectos del centralismo borbónico, que, en otras facetas, favoreció a determinadas categorías sociales de Cataluña y Valencia sobre todo: la abolición de los puertos secos y la tendencia a unificar la acuñación de la moneda en España tuvo que favorecer forzosamente a la pujante burguesía periférica en un momento en que la creación del mercado interior, no es ya sólo una preocupación de los teóricos mercantilistas, sino también de los más importantes políticos del siglo XVIII (21).

El estudio detenido del sistema fiscal podría ser una buena guía para tratar de estudiar la composición constitucional del Imperio español y las razones que puedan justificar las distintas concepciones de la monarquía española; esto es algo que cae fuera de nuestro estudio. Para nuestro trabajo, basta recordar que la guerra de Sucesión posibilita en bastantes aspectos la creación de un estado-nación, ya que: 1) la pérdida del Imperio —vista sin pena por los españoles (22)— reduce

(18) *Instrucción reservada...*, pág. 256 y *Memorial...*, pág. 359, ambos en BAE, t. XLIX.

(19) *Op. cit.*, pág. 167.

(20) Cit. por KAMEN, *op. cit.*, pág. 294.

(21) No puedo estar de acuerdo con Kamen cuando afirma: «La abolición de las barreras aduaneras entre Castilla y la corona de Aragón, y la tendencia a unificar la acuñación de la moneda en España, ciertamente fueron miradas por la burguesía de Barcelona. Valencia y Zaragoza como nuevas pruebas de las ambiciones comerciales de Castilla y de sus aliados los franceses. Cualquier programa para unificar la Península estaba, y está, destinado a ser denunciado por las regiones periféricas como un programa de castellanización», *op. cit.*, pág. 387.

(22) Cfr. DOMINGUEZ ORTIZ, *La sociedad española en el siglo XVIII*, Madrid, 1955, pág. 39.

el territorio de la monarquía al conjunto de reinos de tradición hispánica, y 2) en el interior de la monarquía el Rey, según la doctrina política de la época, puede imponer «su» derecho, pues son territorios conquistados. La comprensión de estos dos factores es clave si se quiere dejar de explicar el centralismo con todo lo que lleva implícito como una medida personal de Felipe V —y de sus sucesores— que trasplantarían a España las instituciones francesas en pro de una mayor eficacia administrativa y de un mayor poder político (personal). La imagen del espejo francés uniforme y brillante en el que se reflejaría una España rota es una imagen falsa. De hecho, algunas de las reformas son anteriores a Felipe V, quien además lógicamente prestaría toda su consideración a aquellas que pudieran favorecer el absolutismo y, por supuesto, la política reformista —en el sentido que puede tener tal término para el siglo XVIII— arranca cuando menos de Olivares. El absolutismo, tal y como se puede observar en el siglo XVIII, no es la copia de Francia, sino la forma política que unas determinadas relaciones de producción hacían inevitablemente necesaria.

A lo largo de todo el siglo XVIII se hace bastante para llevar a buen término la centralización administrativa, anquilosada ya bajo el reinado de los últimos Austrias, propia del estado absolutista, colocando en los puestos claves a una nueva burocracia más eficaz que la nobleza de finales del siglo XVII. Buena prueba de esta actividad administrativa es la «creación» de las Secretarías, el nuevo poder del Consejo de Castilla, el respeto hacia la Inquisición o la creación de la Junta de Estado. Subsiste, sin embargo, el régimen de los Consejos, aunque con menos poder; fueron suprimidos los de Aragón, Italia y Flandes y el de la Cruzada, en el reinado de Fernando VI, y pierde importancia el antiguamente esplendoroso Consejo de Estado —todavía seguirá conservando indudable prestigio—.

Más que la administración central de los Borbones, relativamente bien estudiada, nos interesa la administración que podría considerarse provincial. Desde muy pronto se piensa en una cierta unidad administrativa, que pasaba lógicamente por la abolición de ciertos fueros. Ningún documento más interesante para ver cuál era el pensamiento que animaba esta uniformidad que el decreto de 29 de junio de 1707. «Considerando haber perdido los Reynos de Aragón y Valencia, y todos sus habitantes por la rebelión que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban... y tocándome el dominio absoluto de los referidos Reynos..., pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta Monarquía, se añade ahora el justo derecho de conquista que de ellos han hecho ultimamente mis armas con el motivo de su rebelión: y considerando también que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogación de las leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanzas de las costumbres

podría yo alterar sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia; he juzgado por conveniente (así por esto como por mi deseo de reducir todos mis Reynos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, práctica y costumbre hasta aquí observados por los referidos Reynos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que estos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada; pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos los Castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción...» (23). Merece un breve comentario este decreto tantas veces citado en la historiografía. 1) Se ve con toda claridad cómo se trata de uniformar administrativamente España, hubiera o no rebelión. 2) Todos los súbditos deben ser teóricamente iguales; el principio de extranjería iba en contra de la esencia del estado absolutista (24): todos los súbditos deben ser iguales para el rey. Pero además se puede leer entre líneas la desvinculación entre funcionario y nación: «Por esencia el funcionario de la monarquía absoluta debía cambiar de lugar. De su falta de relación con la sociedad que administraba dependía la fuerza del Estado, y en ocasiones la imparcialidad de la justicia» (25). 3) Para justificar todo esto aduce el quebrantamiento de un juramento, el derecho de conquista y el ser atributo de la soberanía cambiar las leyes; las dos primeras razones eran perfectamente justificables en el pensamiento político de la época, la tercera no. El decreto lo que hace es recoger la fuerte teorización de la soberanía hecha por Bodino y otros sin tener en cuenta las limitaciones que la práctica —y el mismo Bodino— habían impuesto a esa soberanía concebida como «poder absoluto y perpetuo de una república» (26). Entre las limitaciones que la práctica política española imponía al rey absoluto estaba la de respetar los fueros, considerados como leyes fundamentales; en realidad, los soberanos habían sido bastante respetuosos con ellos —y todavía en el siglo XVIII entre los pensadores políticos

(23) *Novísima recopilación*, III, 3, 1.

(24) Ya Olivares había manifestado: «Que se llamen extranjeros y recaten dellos como tales los que no fueren naturales de los reynos y estados de V. Majd., es conforme a toda razón de estado y gobierno, pero que se tengan por deste numero los vasallos hereditarios de V. Majd. es tan lejos de ser conveniencia que lo considero por uno de los mayores fundamentos del apretado estado a que se ve reducida esta Monarquía» («Gran Memorial», ed. cit., págs. 94-95). Felipe V en casi todos los decretos que hoy se conocen genéricamente bajo el nombre de Nueva Planta, hace alusión constante a esta repulsión y firme propósito de desterrarla.

(25) MOLAS, «Las audiencias borbónicas de la corona de Aragón. Aportación a su estudio», *Estudis*, núm. 5, pág. 91.

(26) BODINO, *Los seis libros de la República*, Caracas, 1966, pág. 141.

alienta este respeto a las leyes fundamentales, que de alguna manera se sustraen a la voluntad del príncipe— hasta Felipe V. Si Felipe V puede abolirlos no es porque esa fuera su voluntad; es porque la práctica política de muchos siglos, la ideología religiosa y la teoría política habían trabajado de consuno para hacer tan absoluto el poder del rey que bien podía saltar sobre todos los fueros —al menos, si se da la coyuntura adecuada—. Ya en un escrito de hacia 1714, atribuido a Macanaz, en el que se dice: «sé tu de la calidad u del estado que quisieres, eclesiástico o secular, todo lo que tienes te lo dio Dios por la mano del Rey, y todo te lo puede quitar, minorar o crecer», se indica la posibilidad que tiene el rey de cambiar las leyes fundamentales cuando es para el bien de la monarquía (27). Tan absoluto llega a ser, al menos en la ideología, el poder del rey que León de Arroyal afirma: «En nuestro populacho está tan válido aquello de que el rey es señor absoluto de las vidas, las haciendas y el honor que el ponerlo en duda se tiene por una especie de sacrilegio...» (28). Sacrilegio porque la Iglesia, principalmente pero no sólo la Iglesia, había hecho todo lo posible para mantener una imagen divinizada del monarca; el rey es sagrado tanto para los ilustrados —el caso de Florindablanca o Fernán Núñez (29)— como para los reaccionarios (30); llega hasta tal punto esta unión trono-altar que Blanco White puede señalar: «... Dios y el Rey están tan unidos en la lengua del país que a los dos se les aplica el mismo título de Majestad. Oíría usted que desde el púlpito se pregonan los deberes de los hombres para con las dos Majestades» (31). Esta concepción de la realeza era perfectamente compatible con el paternalismo como bien demuestra la teoría del despotismo ilustrado: el rey es «padre de sus vasallos» (32), a quien todos deben respetar, incluido el pueblo, y quizá éste con más razón ya que el rey era su defensor contra las clases poderosas (33).

En la ideología política del siglo XVIII el rey es padre, señor omnipoderoso, algo más que lugarteniente de Dios; rey y estado son dos elementos de una misma noción, igual que lo son patria y nación; todo queda unificado bajo los términos rey-patria. Mejor dicho, los que se benefician del poder tratan de subsumir todas las contradicciones con referencias, más o menos vagas, más o menos fuertes, al patriotismo o al paternalismo real. Claro que las contradicciones existen y muchas veces no se oye «el Rey, nuestro amo» o se evidencia que algunos no

(27) *Refutación erudita y satírica del papel que dio a la luz E.D.I.P.C. sobre aclarar el legítimo derecho que S.M. el señor D. Felipe V tiene a la corona de España, contra el pretendido por el Archiduque*, en «Semanario Erudito», t. VIII, págs. 182 y 193.

(28) *Cartas político-económicas al conde de Lerena*, Madrid, 1968, pág. 210.

(29) Cfr. MURIEL, *Historia de Carlos IV*, t. I (BAE, t. CXIV), págs. 67 y 81-83.

(30) Cfr. HERRERO, *Los orígenes del pensamiento reaccionario español*, Madrid, 1973, especialmente las págs. 126-127 y 131.

(31) *Cartas de España*, Madrid, 1972, pág. 43.

(32) JOVELLANOS, *Elogio de Carlos III*, en «Clásicos castellanos», vol. 129, pág. 61.

(33) JOVELLANOS, *Oración inaugural en la apertura del Real Instituto Asturiano*, en BAE, tomo XLVI, página 319.

tienen patria: «El hombre sin propiedad nada posee; el que nada posee, nada tiene que perder; y el que no tiene nada que perder, no tiene patria. Este hombre es el labrador sin tierra, y el artesano sin cuerpo» (34). Volveremos sobre ello.

Con bastante frecuencia se señala la uniformidad de la administración «provincial» implantada por los Borbones. El siglo XVIII hereda del anterior en el plano territorial los reinos, capitanías generales, audiencias, provincias y corregimientos. De todos estos términos, el de reino es el que más pronto pierde su significado, y en el siglo XVIII sólo nos sirve para estudiar Navarra. Dejamos a un lado el corregimiento y otras demarcaciones que poco importan al objeto de nuestro trabajo. Las otras tres demarcaciones territoriales son esenciales para el estudio de la administración territorial en el siglo XVIII; la audiencia tiene una doble función judicial y gubernativa, mientras que la capitanía general la tiene principalmente militar. La provincia conserva (35), en cambio, una función principalmente fiscal, aunque no puramente fiscal; sea cual sea la función desempeñada por la provincia, no puede ser cierta la afirmación de Font: «La finalidad de las provincias fue principalmente constituir el marco de la jurisdicción de los intendentes» (36); en todo caso, habría de admitirse que el intendente se creó para cubrir el marco jurisdiccional de las provincias, que bien pudo cambiar, algo por demás bastante dudoso, ya que todas las provincias no tuvieron en cualquier momento «su» intendente (37).

Más importancia en la administración territorial tienen las audiencias y las capitanías generales, instituciones heredadas de los Austrias, que en casos concretos se modifican profundamente. Ya desde los Reyes Católicos existían las Chancillerías de Valladolid y Granada y la Audiencia de Galicia, en el siglo XVI se crean las Audiencias de Sevilla y Canarias; entre 1493 y 1571 se organizan en la corona de Aragón las audiencias de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. La guerra de Sucesión implica una transformación profunda de las audiencias de la Corona de Aragón: en 1707 se manda «que la Audiencia de Ministros que se ha formado para Valencia, y la que he mandado se forme para Aragón se manejen y gobiernen en todo y por todo como las dos Chancillerías de

(34) CAPMAY, *Discurso político-económico, sobre la influencia de los gremios en el estado, en las costumbres populares, en las artes y en los mismos artesanos*, en «Semana Erudito», t. X, páginas 174-175.

(35) Decimos «conserva» porque ya bajo los Austrias la provincia había tenido este sentido, véase DOMINGUEZ ORTIZ, «Concesiones de voto en Cortes a ciudades castellanas en el siglo XVII», en el vol. *Crisis y decadencia en la España de los Austrias*, Barcelona, 1969, pág. 102. y A. CASTILLO, «Population et "richesse" en Castille durant pendant la seconde moitié du XVI^e siècle», *Annales*, 1965, tomo II, especialmente las páginas 720 y 722 n.

(36) *Diccionario de Historia de España*, Madrid, 1952, II, pág. 939.

(37) Vid KAMEN, «El establecimiento de los intendentes en la administración española», *Hispania*, 1964, especialmente el apéndice II, y también GONZALEZ ALONSO, *El corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1970, especialmente las páginas 247-250 y 282-283.

Valladolid y de Granada; observando literalmente las mismas regalías, leyes, prácticas, ordenanzas y costumbres que se guardan en éstas, sin la menor distinción y diferencia en nada, excepto en las controversias y puntos de jurisdicciones eclesiásticas, y modo de tratarla» (38); en 1711 se da nuevo gobierno a la audiencia de Aragón, del cual lo más interesante es lo siguiente: «La Sala civil ha de juzgar los pleytos, que ocurrieren, según las leyes municipales del Reyno de Aragón; pues para todo lo que sea entre particular y particular es mi voluntad se mantengan, queden y observen las referidas leyes municipales, limitándolas sólo en lo tocante a los contratos, dependencias y casos en que yo interviniere con qualquiera de mis vasallos, en cuyos referidos casos y dependencias ha de juzgar la expresada Sala de lo civil según las leyes de Castilla. Y declaro, que el Comandante General de este Reyno ha de presidir la referida Audiencia...» (39); en 1715 se reforma la audiencia de Mallorca y en 1716 las de Cataluña y Valencia, siguiendo todas el modelo de Aragón. De todas estas reformas interesa retener: 1) A excepción de Valencia, las causas civiles se juzgarían según el derecho autóctono; 2) la imposición a la Audiencia de Cataluña de sustanciar las causas en lengua castellana (40); 3) algo parecido se intenta en Mallorca: una real resolución de 1717 ordena que «las sentencias, decretos y provisiones se escriban en castellano, expresando motivos, y no en latín, como se hacía antiguamente»; el castellano trata de generalizarse, pero las dificultades desde su introducción obligan a suavizar la normativa: «*Duda 16.* Que habiéndose introducido por la nueva Audiencia el despachar las letras y provisiones, que van dirigidas a los Bayles de las villas para execuciones y otras cosas en lengua castellana, quando antes se despachaban en lengua mallorquina, se cree será muy nociva esta práctica al Público y particulares, por no encontrar en la mayor parte de las villas personas que entiendan la lengua castellana; y será muy conveniente que yo mande que las letras y provisiones se despachen, como por lo pasado en lengua mallorquina, como también que se reciban los testigos así de causas criminales como de civiles, en el mismo idioma mallorquín, para evitar el inconveniente que se ha de seguir de equivocarse en muchas ocasiones los Escribanos el hecho del declarante, por no entender la lengua castellana, no habiendo inconveniente en que se reciban en mallorquín, por ser del cuidado de los Relatores la traducción al idioma castellano. *Resolución.* En quanto a esta duda mando se executen los despachos, como se propone en ella, previniendo, se procure mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos: y habiendose informado por el mismo marqués de Ledesma el modo que observa la Audiencia, en quanto a publicar las sentencias en las causas criminales, y el que se practicaba antiguamente; ordeno y mando a la Audiencia, que estas

(38) *Novísima*, V, 7, 1.

(39) *Novísima*, V, 7, 2.

(40) *Novísima*, V, 9, 1.

sentencias se intimen al reo en su persona, y se publiquen en la misma Audiencia...» (41). 4) A pesar de que el estado absolutista requería la desvinculación del funcionario de su lugar de nacimiento, a pesar de todo lo que se dice contra la extranjería entre los distintos reinos de España y a pesar de la castellanización de la administración en la Corona de Aragón, «todas las Audiencias reservaron en la práctica una parte de las plazas a los elementos naturales del mismo reino; eran las llamadas *plazas nacionales...*», cuya conveniencia, en opinión de Molas, reconocía la misma administración central «para que hubiese en las Audiencias quien estuviese enterado de los fueros, privilegios y costumbres de cada reino». La provisión de estas plazas obedecía a criterios esencialmente «pragmáticos» (42). 5) La presidencia de la Audiencia por el Capitán General del reino, con todo lo que ello lleva consigo; Molas desenfoca el alcance de este hecho en relación con toda España: «El presidente civil fue sustituido por el Capitán General, mientras aparecía el regente, como jefe civil del tribunal. Al igual que otros casos y soluciones institucionales aplicados en la Corona de Aragón —...— la presidencia militar sobre el tribunal de justicia terminó alcanzando, aunque tardíamente, la misma Corona de Castilla. Por decreto de 1800, las prestigiosas chancillerías de Valladolid y Granada, y con ellas las demás audiencias castellanas, fueron puestas bajo la presidencia del capitán general respectivo, asumiendo una estructura semejante a la de la Corona de Aragón» (43). Lo desenfoca porque: a) se tenía ya el modelo de las audiencias indianas; b) en Galicia el capitán general del reino es gobernador de la audiencia por lo menos desde 1669 (44) y en Canarias desde 1671 (45) y c) apunta un régimen extraordinariamente uniforme que está muy lejos de la realidad, como bien demuestra el caso de la audiencia asturiana.

El principado de Asturias tenía un grado bastante elevado de autogobierno gracias a la existencia desde muy temprano de una Junta del Principado formada en principio de una manera bastante democrática; con el tiempo, la Junta fue convirtiéndose en portavoz de la clase dominante. Las quejas, a las que da lugar el proceder de la Junta, llevan a la creación de una audiencia, a pesar de la oposición de aquella, que subordina la actuación de la Junta: «Y para que se mantenga la voz y representación del Principado mando, que se celebren las Juntas generales y particulares de la misma forma que ha sido costumbre; y que unas y otras, cuando las tuvieren, las presida el Alcalde Decano de la Audiencia, o el que el Regente para ello nombrare; y lo que en ellas se acordase se dé cuenta a dicha Audiencia, para

(41) *Novísima*, V, 10, 4.

(42) MOLAS, art. cit., págs. 78 y 81.

(43) *Ibid.*, pág. 76.

(44) *Novísima*, V, 2, 1 n.

(45) *Novísima*, V, 5, 19. Tanto en este caso como en el anterior se quiere diferenciar bien lo militar y lo judicial.

que con su aprobación se haga lo que fuere más conveniente a mi servicio, y al bien público de aquel Principado» (46); en 1805, cuando se forma la Comandancia General de Asturias, separada de la Capitanía General de Castilla la Vieja, el jefe militar del distrito pasa a presidir la Audiencia de Oviedo (47).

El régimen de Audiencia-Capitanía General no es uniforme ni mucho menos, pero con él se pretendía ir hacia una cierta uniformidad en la administración territorial del siglo XVIII. Lejos de este régimen estaba el País vasconavarro (48), en donde se puede ver una cierta unidad, «de la que el simbolo más aparente era el uso del idioma vasco» (49). Con todo, se pueden distinguir desde un punto de vista administrativo al menos dos conjuntos diferenciados (50), en estos únicos países forales después de la Nueva Planta, las llamadas provincias exentas. Por un lado, Navarra, auténtico reino con su capital, y Cortes, su hacienda particular, moneda propia, etc.; tiene, por tanto, una relativa independencia que en ningún caso debe exagerarse, pues la Corona intervenía en el gobierno interior del país a través, sobre todo, del Consejo de Cámara, y en algún caso a través del intendente (51).

Por otra parte, las tres provincias vascas donde había un alto grado de autogobierno mediante juntas «que dictaban ordenanzas, recaudaban impuestos y, en caso de guerra, organizaban la movilización» (52). La existencia de estas juntas no debe hacer pensar en una amplia autonomía igualitaria; de hecho, cada vez más fueron adquiriendo un carácter oligárquico, lo que en cierto modo presupone una merma de su relativa independencia, pues los vascos, ciertos vascos, preferían acudir a los tribunales centrales antes que a unas juntas que en muchos casos suponían (y con razón) contrarias a sus intereses, no de vascos,

(46) *Novísima*, V, 3, 1.

(47) Acerca de Galicia, donde igualmente existía una Junta, dice Domínguez Ortiz: «Todas (las provincias), en plan de igualdad concurrían con sus diputados (miembros de la nobleza y algunos de la alta burguesía) a las Juntas del Reino de Galicia, institución nacida en el siglo XVII para administrar los servicios pecuniarios y que, con el tiempo, se fue convirtiendo en órgano representativo de todo el reino. Representatividad muy limitada, pues dimanaba de la oligarquía dominante y era, ante todo, portavoz de sus aspiraciones, como veremos lo hizo en la cuestión de los fueros. Aún con todas sus limitaciones, era esta una ventaja de que no gozaban otros reinos y provincias de la Monarquía», *Sociedad y Estado...*, página 127.

(48) Habría de señalarse la peculiaridad administrativa de la Montaña.

(49) DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Sociedad y Estado...*, pág. 156.

(50) Una diferenciación que los mismos conjuntos regionales tratan de aclarar desde un punto de vista fiscal: «Se llega en 1727 a un estipulado entre Patiño, como representante del rey, y las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. La provincia de Alava llega a este acuerdo más tarde, en 1748. Con estos acuerdos se mantuvieron una serie de "aduanillas" entre estas provincias y la navarra, como testimonio de que se trata de dos exenciones distintas, concebidas individualmente» (MUÑOZ PEREZ, «Mapa aduanero del siglo XVIII español», *Estudios Geográficos*, núm. 61, pág. 776; vid. también páginas 769-770).

(51) Vid. en el apéndice III del cit. art. de KAMEN el título de intendente del reino de Navarra y provincia de Guipúzcoa.

(52) DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Sociedad y Estado...*, pág. 173.

sino de clase; pero además esta autonomía desde un punto de vista administrativo dejaba bastante que desear, ya que en cada provincia existía un corregidor como representante de la autoridad real, no tenía obispado propio, en lo judicial dependían en buena parte del juez mayor de Vizcaya, directamente relacionado con la Chancillería de Valladolid, y debían sustanciar las causas inquisitoriales en el tribunal de Logroño —es bien sabido el papel unificador desempeñado por la Inquisición en España—. Habría de destacarse además la diferencia, clave en el Anrriquo Régimen, existente entre Alava y Vizcaya y Guipúzcoa, que pretendían el reconocimiento de hidalguía para todos sus habitantes.

Desde los Reyes Católicos se trata de crear un estado absolutista de corte moderno, y en muchos aspectos se consigue; sin embargo, la monarquía (el estado) que encontramos en el siglo XVIII es todavía un estado con bastantes aspectos feudales, en algún sentido retrógrado, y lo es porque en pro de una estructura estatal determinada —la unión de multitud de reinos que a veces no tenían nada en común bajo una misma persona— se deja a un lado el factor fundamental de la monarquía absolutista: el desarrollo de una voluntad colectiva nacional. Indudablemente existía una voluntad nacional, a la que ya hemos aludido, frente al extranjero y desde luego, existía una voluntad nacional en un sentido moderno en determinadas categorías sociales; pero en conjunto faltaba por condiciones históricas y por deseo de la propia monarquía como señala Marx: «Y así la monarquía absoluta encontró ya en España una base material que por su propia naturaleza repelía la centralización, ella misma hizo además cuanto estuvo en su poder para impedir que se desarrollaran intereses comunes basados en una división nacional del trabajo y en una multiplicación del tráfico interior —única y verdadera base sobre la que poder crear un sistema administrativamente uniforme y el dominio de leyes generales—. Así, pues, la monarquía absoluta española, a pesar de sus superficiales semejanzas con las monarquías absolutas de Europa en general, debe ser más bien catalogada junto con formas asiáticas de gobierno» (53). La cita de Marx, con todas las matizaciones que puedan hacersele, nos sitúa en el aspecto nodal del problema que tratamos.

Ciertamente en el siglo XVIII se hacen bastantes esfuerzos, unos más serios y otros menos, para desarrollar, impulsar si se quiere, una conciencia nacional. Baste señalar la abolición de los fueros de la Corona de Aragón, la desaparición de la barrera aduanera entre Aragón y Castilla, la liberalización del comercio interior, la apertura del mercado indiano a casi todos los súbditos españoles, la desaparición de ciertas barreras sociales «formalistas», el impulso

(53) MARX y ENGELS. *Revolución en España*, Barcelona, 1970, pág. 75. La idea se manifiesta ya en el siglo XVIII, cfr. MONTESQUIEU, *Del espíritu de las leyes*, Madrid, 1972, pág. 61.

dado al castellano como lengua oficial de la nación, el intento de desarrollar la nación con sociedades que genéricamente se dan el muy significativo título de amigos del país, la deseada españolización del gobierno central y de nuevo el ataque solapado (a veces menos) a los fueros que culmina con el encargo hecho a Llorente para que minara los fundamentos históricos de las pretensiones vascas. Los fueros no son más que uno de los muchos aspectos de este problema. La centralización, si ésta implica nación, y el regionalismo no puede verse, pues, desde la perspectiva de los fueros. Es frecuente la visión que explica el nacimiento, el desarrollo o la defensa apasionada de una conciencia regional, si se quiere subnacional, como rechazo a un centralismo que habría abolido los fueros, y con ello habría matado la libertad de los pueblos. Tal visión es demasiado simplista para ser cierta. La noción de fuero lleva implícita un estatuto de privilegio y donde existe el privilegio es imposible que exista la libertad, porque existe la desigualdad. Esta desigualdad, bien fuera con respecto a otras naciones, bien lo fuera con respecto a otras clases, es lo que se trata de defender al defender el fuero, categoría por demás implícita en la monarquía del Antiguo Régimen, donde todo se esperaba del rey menos la desaparición de los fueros —desde luego, siempre que estos fueros interesaran—; no deja de ser significativo el hecho de que Valencia, el reino más castigado con la Nueva Planta, cuando el rey promete en su visita de 1719 devolverle los fueros, no reaccione porque «el pueblo era indiferente, y las clases altas consiguieron que se mantuvieran sus seculares privilegios» (54); no deja de ser significativo tampoco que en el País vasconavarro el ataque de la monarquía a los fueros «no hallara la oposición de un frente unido, porque en ellos había cosas que a las clases medias y altas interesaban poco o nada en absoluto» (55). Cuando se nos habla de las libertades forales debemos preguntarnos para qué; las libertades que en gran medida no pueden desarrollarse al margen de las instituciones forales, con frecuencia son demasiado bonitas sobre el papel, pero en su historicidad pierden belleza; también las instituciones forales son órganos de poder y el poder no es indiferente a las clases.

En un terreno superficial, parece que las múltiples reformas del siglo XVIII han llevado a cabo la realización de un estado realmente nacional, visión con la que tiene mucho que ver el fortalecimiento de la autoridad real al que han contribuido tanto las fuerzas reaccionarias como los progresistas. Ya a nadie se le ocurre decir, como el Conde-Duque, al Rey que se haga rey de España; se da por supuesto que el monarca lo es de España, que es rey de una nación a la que se puede (y se debe tratar) uniformemente. España es una realidad geopolítica donde la historia del territorio nacional parece importar poco, sólo es válida si los

(54) DOMINGUEZ ORTIZ, *Sociedad y Estado...*, pág. 86.

(55) *Ibid.*, pág. 160.

límites que ha aportado la historia sirven para algo; esto en cierto modo es lo que piensa Ward cuando en 1762 planifica en su *Proyecto económico* una visita para promover los intereses de España: «Se dividirá el Reyno en trece departamentos que serán: 1.º Galicia: 2.º el Reyno de León y Asturias: 3.º Vizcaya, Cantabria, o Montaña y Navarra: 4.º el Reyno de Aragón: 6.º Valencia: 7.º Murcia y Granada: 8.º Andalucía: 9.º Extremadura: 10 y 11 Castilla la Vieja con la Rioja, que por su extensión e importancia formará dos Departamentos: y asimismo 12 y 13 Castilla la Nueva, incluyendo la Mancha y la Alcarria» (56). Esta actitud la apoya algún sector de la burguesía que tratará de fomentar una mejor organización administrativa del estado-nación; es el caso, por ejemplo, de Arroyal, quien —después de señalar como casi monstruosa la organización territorial de España— trata de uniformar administrativamente la nación de acuerdo con provincias iguales: «La igualdad en la división de las provincias es el cimiento de la buena administración económica, civil y militar; es el gran fundamento de la exactitud en el arte de calcular, y es la única que nos puede poner en estado de fomentar este gigante cuerpo de la monarquía» (57).

Por supuesto, no siempre se piensa así, incluso entre aquellos organismos considerados más progresistas por ciertas historiografía. Las Sociedades Económicas de Amigos del País, institutos en bastantes ocasiones mimados por el gobierno, son buena prueba de ello. La tierra para los Amigos del País no es un trozo de la nación sobre el que ejercer el bien público indiscriminadamente; la tierra para ellos es una forma de dominio, y por eso pueden considerarse un aparato de poder más entre los muchos del Antiguo Régimen. Los Amigos del País no son esas instituciones centralistas o centralizadoras que trata de crear el gobierno, sobre todo, después de la fundación de la Matritense, con frecuencia son lo contrario. Ejemplos bastante claros de este aserto son las sociedades de Baeza y de Vera. La primera, se funda con el título de «Sociedad de Verdaderos Patricios de Baeza y Reino de Jaén» pretendiendo abarcar un ámbito geográfico mucho mayor del que en realidad le correspondía, hecho que I. Arias de Saavedra explica del modo siguiente: «Puede entenderse como un intento de recalcar cierta preeminencia de tipo histórico sobre la propia capital de la provincia, en recuerdo de la época pasada en que la capitalidad del reino la detentaba Baeza» (58). El caso de Vera es totalmente diferente; la Sociedad de Amigos del País (antes de ser aprobada trata de influir sobre gran número de pueblos de la provincia y obtiene el apoyo del intendente señalándole que su creación debe servir «de estímulo a hacer lo propio en iguales pueblos de esta provincia») pide en su expediente fundacional quedar exenta «de la dependencia

(56) Madrid, 1779, pág. 3.

(57) *Op. cit.*, pág. 198.

(58) *La sociedad de verdaderos patricios de Baeza y Reino de Jaén*, pág. 44. Memoria de Licenciatura inédita.

a otra, aunque se forme la de la capital de la Provincia», a lo cual accede la Matritense —y el Consejo— «con tal que dé cuenta cada año a la Sociedad de Madrid por medio de un individuo que se nombrará a este efecto» (59); la Sociedad, que desecha toda relación con la provincia, trata de unir «su» tierra a la Matritense. A pesar de la política centralizadora que trata de llevar al gobierno con las Sociedades a través de la Matritense, el fenómeno descrito para la de Vera debe ser frecuente, pues el censor de la Sociedad de Madrid, en el informe que da sobre la creación de una Sociedad en Motril, recuerda al Consejo qué política debe seguirse teniendo en cuenta la experiencia de las ya existentes: «No ignora el Consejo que, desde que se estableció la Sociedad de Madrid, se han multiplicado tanto estos establecimientos que aún en pueblos de corta población se han formado sociedades económicas. Sea porque se han hecho de moda o bien por la natural inclinación de los hombres a imitar lo que hacen los superiores, inclinación que se experimenta más en las Monarquías por la distinción de clases esencial en este género de gobierno, pero el magistrado debe templar esta especie de emulación y contenerla cuando no espera que de ella resulte algún bien al Estado.

«Esta multitud ha excitado la duda de si conviene o no en todos los pueblos. A la verdad en aquellos que es corto el número de vecinos, y son pocos sus haberes, es inútil y aún acaso perjudicial un establecimiento de esta naturaleza; y aún en los pueblos de algunas consideración, en caso de establecerse, debía agregarse a la de las capitales y proceder de acuerdo con ellas en las operaciones; pero la experiencia ha dado a conocer al censor que entre nosotros es, cuando no imposible, sumamente difícil conseguir esta agregación y que prefieren carecer de estos establecimientos que tenerlos con agregación a otro...» (60).

En las Sociedades Económicas (podrían multiplicarse ejemplos como los ya vistos), más que un sentimiento nacional del que tanto alardean, puede verse un sentimiento muy distinto de patria. Lo que invocan las Sociedades no es la patria grande, lo que tratan de poner a flote es «su» patria, y no precisamente con amor al terruño. Los Amigos del País tratan de valorar, en la mayoría de los casos sobrevalorar, su patria chica con el fin principal de conseguir un prestigio (ello llevaba implícito con frecuencia unas relaciones formalmente estrechas con la Sociedad de la Corte) mediante el cual poder enfrentarse a otros poderes; el comportamiento de casta realmente cerrada que adoptan muchas sociedades y sus demasiado frecuentes chovinismos son buena prueba de ello.

(59) AHN, Consejos, leg. 653, expediente 15. El original de este informe en ASEM, leg. 3, expediente 22.

(60) AHN, Consejos, leg. 6024, expediente 104.

En el siglo XVIII existe en España una monarquía absoluta, muy absoluta, que trata de agrandar su poder por todos los medios a su alcance —sobre todo, a través de una ideología bastante tradicional y mediante una serie de reformas que posibilitaran el desarrollo de las fuerzas productivas sin dañar la superestructura jurídico-política, algo en esencia contradictorio—, y uno de estos medios era favorecer el fraccionamiento de los poderes locales, lo cual, forzosamente, los hacía débiles; una autoridad cabalgaba sobre otra y un organismo estaba siempre al lado de otro organismo con más, menos o igual poder real. Así, la monarquía absoluta podía imponer su centralismo, pero descentralizando, mal descentralizando. En última instancia, la autoridad estaba en el rey; pero tal autoridad no llegaba porque se diluía en una maraña de poderes, todos los cuales —incluso los forales— se derivaban del rey, o mejor dicho decían derivarse (desde luego, de alguna forma se relacionaban). El poder de la monarquía absoluta, aunque en ocasiones se hiciera sentir con fuerza excesiva, era un poder poco más que ilusorio, ya que este poder no descansaba en una base nacional sólida, sino en el privilegio de unos sobre otros, y sobre estos privilegios, y para estos privilegios, el estado (61). La España setecentista, por más que se señale lo contrario, es un país de fueros como muy bien acierta a decir Pablo de Olavide: «Parece que España es un Cuerpo compuesto de muchos Cuerpos pequeños, destacados y opuestos entre sí, que mutuamente se oprimen, desprecian y hacen una continua guerra civil. Cada provincia forma un Cuerpo aparte, que sólo se interesa de su propia conservación, aunque sea con perjuicio y depresión de los demás. Cada comunidad religiosa, cada colegio, cada gremio se separa del resto de la nación, para reconcentrarse en sí mismo...

«De aquí viene que toda ella esté dividida en porciones y cuerpos aislados, con fuero privativo, con régimen distinto, y hasta con traje diferente, siendo las resultas de esta segregación, que el militar, el letrado, el colegiado, el religioso, el clérigo, sólo son lo que su profesión indica, pero jamás ciudadanos. De aquí nace ese espíritu de Cofradías con que el pueblo, desde el alto al bajo, se divide cada uno en su clase, y quiere distinguirse hasta en el culto. Y proviene, en fin, aquel fanatismo con que tantos han aspirado a la gloria de Fundadores...

«Por estos principios, se puede mirar hoy a España como un cuerpo sin vigor ni energía, por estar compuesto de miembros que no se unen entre sí, sino que cada uno se separa de los demás, perjudicándoles en cuanto puede, para

(61) Arroyal señala perfectamente esto: «... la suprema autoridad está repartida en una multitud de consejos, juntas y tribunales, que todos obran sin noticias unos de otros; y así lo que uno mando otro lo desmanda, y todo a nombre del Rey; por lo cual decía un amigo mío que la potestad regia estaba descuartizada como los ajusticiados. Yo comparo nuestra monarquía, en el estado presente, a una casa vieja sostenida a fuerza de remiendos, que los mismos materiales con que se pretende componer un lado, derriban el otro, y sólo se puede enmendar echándola a tierra y reedificándola de nuevo, lo cual en la nuestra es moralmente imposible...» (*Op. cit.*, pag. 68).

exaltarse a sí mismo; como una república monstruosa, formada de muchas pequeñas, que reciprocamente se resisten, porque el interés particular de cada una está en contradicción con el general. Como una máquina inerte, sin unión ni fuerza, porque le falta el principal resorte de la emulación a quien ha extinguido la prepotencia; pues estando todos los individuos en guerra de poder unos con otros, se reduce a la triste alternativa de opresores o de oprimidos, dando el tono los que llevan el mando.

«Tal vez todos los empleos se confieran a los naturales de una provincia, con exclusión de los demás. Tal vez los obtienen sólo los colegiales, desatendidos todos los otros estudiantes. Tal vez el servicio de tierra se exalta con el abandono del de marina, y al contrario. Un jefe en poder determina el giro de las cosas; y de aquí nace que cada particular, a quien no gobierna sino su propio interés, se concentra cuanto puede con su cuerpo, y se enciende en todos el espíritu fanático de partido, que apaga el nacional. Cada uno es militar, es eclesiástico, es colegial tan exclusivamente que desprecia a los otros y nunca es español. Se extingue el amor de la Patria; no se entra en la idea de Nación, y cada cual es tan frío e indiferente para el bien de su país como ardiente y determinado por el de su profesión...

«Diremos de paso que a esta infeliz constitución ha dado mucho aumento, si no el origen, los privilegios concedidos a cada Cuerpo, y sobre todo el fuero privativo, que exime a los individuos de la jurisdicción ordinaria, que es el único que debiera regir, como que es la fuente de todas. Sería muy conveniente extinguir este abuso, mandando que cada Cuerpo tenga sólo fuero en los delitos y causas relativas a su profesión, pero que en las civiles o comunes a los ciudadanos se sujete a la jurisdicción ordinaria, como se practica en las naciones de mejor policía. Y mientras la nuestra se mantenga en el estado de inhibiciones y privilegios que la dividen y enemistan, ni será una nación unida y vigorosa ni se verá en ella la recta administración de la justicia» (62).

Evidentemente, los teóricos del XVIII tenían argumentos sobrados para rebatir a Olavide y a los que pensaran como Olavide; el más importante de todos era hacer del fuero un privilegio (en verdad lo era) y hacer del rey fuente de todo privilegio, por tanto, el único que podía darlo y de igual manera quitarlo —sobre todo, si se pone como argumento supremo, y se pone con frecuencia, el bien de la nación (63)—: el rey me lo dio, el rey me lo quitó (Dios guarde al rey). Es por ello por lo que los ilustrados hacen tanto hincapié en el poder del rey bueno (paternalismo): todas las reformas pueden y deben hacerse mediando el poder del

(62) *Plan de estudios para la Universidad de Sevilla*, Barcelona, 1969, págs. 81-83.

(63) Paradigmático es D. Pedro Rodríguez de Camponames en su *Tratado de la regalia de amortización*.

rey; así se evita cualquier revolución, palabra que suena muy mal incluso a los oídos de un Cabarrús (64). Con este pensamiento se inician las obras más importantes en todos los aspectos del siglo XVIII español. Pero en el fondo este pensamiento era esencialmente contradictorio, tanto como la realidad que trataba de encubrir. Todo se esperaba del rey, un rey que con este esquema no podía dar nada más que privilegios (y también quitarlos). Así, este estado tan absoluto que no puede permitir otro estado dentro de sí, siguiendo una línea de pensamiento ya vieja, puede expulsar al «estado» de los jesuitas, pero debe permitir estados y más estados de la nobleza; puede impulsar la desamortización eclesiástica, pero los mayorazgos que den para vivir «noblemente» deben quedar incólumes; etc. La esperanza depositada en el rey por todos los grupos reformistas (y, a veces, los reaccionarios) nos indica, mejor que ningún otro hecho, hasta qué punto se habían fusionado los conceptos de rey y estado, hasta qué punto se estaba lejos de un estado nacional y hasta qué punto el rey podía tratar como un todo uniforme el conjunto «nacional», a pesar de las múltiples diferencias existentes.

A lo largo de todo el siglo XVIII español se ha ido desarrollando un sentimiento nacional, mucho más acusado que el de las centurias anteriores, cuya materialización en el estado nacional se manifiesta pronto imposible por las características propias de la «constitución» española. La monarquía, con su peculiar concepción de la soberanía, hace mucho en favor de esta consecución de un estado nacional, y, a veces, también hace mucho para detener la marcha hacia la consecución de tal estado; por un lado, a la monarquía le interesaba la transformación del estado de «patrimonial» en nacional y, por otro, le interesaba más bien lo contrario, ya que «esta transformación no podría hacerse sin “pérdidas” para la Corona» (65). Si se tiene en cuenta la amplísima base social sobre la que descansa la concepción del poder en el siglo XVIII, forzosamente ha de llegarse a la conclusión de que la actuación contradictoria de la monarquía absoluta española no es porque así lo quisiera el monarca, sino porque la formación social del momento exige esa actuación contradictoria. De hecho, la realización de un estado nacional necesitaba la existencia de una burguesía industrial fuerte a la que le es imprescindible la formación de un mercado nacional sin barreras, sean del tipo que sean, y necesitaba que esta burguesía se convirtiera en clase hegemónica. La debilidad de esta burguesía en la España del

(64) Cabarrús propone un plan de «educación nacional» para formar buenos ciudadanos, con el fin de atajar «aquellas revoluciones y aquellos excesos que llora la humanidad» y dice: «¡Ah! Si para reformar de un golpe los abusos que la altera hubieran de perecer la felicidad de dos generaciones, lejos, lejos de mí, diría, tan funestas mejoras. Dejad que el tiempo y el progreso de las luces hagan sin esfuerzo lo que ahora o es impracticable o demasiado costoso», *Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública*, Madrid, 1973, pág. 120-121.

(65) TERRON, *Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea*, Barcelona, 1969, pág. 62.

siglo XVIII es manifiesta. Existe, por el contrario, una burguesía mercantil relativamente fuerte que necesita para su desarrollo (igual que los estamentos privilegiados para sobrevivir) del privilegio y, en consecuencia, de una monarquía fuerte, más que de un estado nacional en el sentido que puede tener tal término para la Revolución. No puede existir un estado nacional porque el bloque en el poder impide su formación, a pesar de que con relativa frecuencia sus intereses apuntan hacia la unidad nacional; ello favorecerá la ampliación de este sentimiento nacional que tendría amplio eco en el conjunto del pueblo, entre otras muchas razones porque tal sentimiento se veía junto a una serie de nociones que, por motivos diversos, adquieren la categoría de mitos para la gran masa del pueblo español, mitos gracias a los cuales en buena medida se manifiesta el espíritu nacional y por cuya causa, en buena parte, se impide la formación del estado nacional. La opinión que acerca de ello nos da Blanco White en sus artículos políticos aparecidos en *El Español* (66) es buena prueba de ello; merece la pena ver esta opinión, de la que, desde luego, se debe discrepar en bastantes sentidos.

Blanco afirma: «La España, nación que se puede decir agregada de muchas según la progresiva anexión de los reinos que la componen, no había tenido tiempo de reunir a sus habitantes por el influjo de un gobierno feliz e ilustrado, que bajo la uniformidad de las leyes hace olvidar a los pueblos las preocupaciones de rivalidades antiguas»; en su opinión, todos los reyes (desde Carlos V a Carlos IV) se han preocupado de destruir el espíritu nacional, aunque éste se conserva y manifiesta con heroísmo en la guerra de la Independencia, una guerra en la que las juntas, primero, y la Junta Central, después, hacen todo lo posible para mantener la situación anterior, de la cual únicamente podrá salirse mediante una revolución verdadera (o un genio extraordinario) capaz de conseguir una constitución auténticamente popular y española, de acuerdo con la cual pudieran convivir bajo la uniformidad de la ley todos los españoles. Lo que más interesa retener en nuestro estudio de la visión de Blanco es la opinión de que la constitución debe ser fruto de la transformación (revolucionaria) de la sociedad española y de que sólo en este sentido podría emanciparse, adquirir su verdadero sentido el espíritu nacional, para lo cual se precisaba una ruptura con el orden (político) anterior, ruptura que en ningún caso quiere llevar a efecto la Junta Central (67). La fuerte influencia de la ideología política anterior, principalmente la figura del rey, a la cual se unía la mentalidad de muchos la noción de patria, en la ideología «nacional» de la guerra de la Independencia y la utilización posterior de ella, nos indica bien hasta qué punto el orden político anterior, consustancial con el privilegio, podía impedir la formación de un estado nacional.

(66) Lo que sigue se basa principalmente en estos artículos y en algunas cartas reproducidas en la Antología preparada por Llorens, Barcelona, 1971.

(67) Cfr. el juicio de Marx, *op. cit.*, pag. 96.

En definitiva, puede decirse que existía un sentimiento nacional en la España del siglo XVIII, pero no un estado nacional. Debemos plantearnos ahora si existía una conciencia regional, en qué medida ésta era favorecida o perjudicada por el estado y hasta dónde era compatible o no con la idea de nación. Para estudiar en este contexto las regiones no es válido un criterio puramente geográfico de la región, no interesa demasiado el origen histórico de la región, ni puede servir la regionalización administrativa de la España dieciochesca en parte porque no es uniforme y en parte porque aún se está formando a lo largo del siglo XVIII; más interesante son los rasgos étnicos, hasta ahora poco estudiados, y el comprobar si existe o no «un sentimiento de identidad étnica regional» (68), que implica con relación a la nación y cómo se comporta el estado con estos regionalismos.

La opinión más generalizada, quizá por tradicional, es que el centralismo propio del absolutismo borbónico habría hecho todo lo posible para acabar con las peculiaridades regionales en su deseo de reducir el territorio nacional a la uniformidad (en este caso, a la uniformidad de Castilla). Ante esta situación, las regiones que tuviera conciencia de su unidad habrían sentido repugnancia y sólo habrían acatado aquello que se les impusiera por la fuerza. La verdad es muy distinta. Y para acercarnos a ella hay que tener en cuenta: 1) qué es el estado nacional, y 2) que en las regiones, existe o no la conciencia «nacional», existen sin duda las clases, y que esta conciencia pasa, por así decirlo, por ellas. Si se tienen en cuenta estos dos elementos pueden dejarse a un lado muchos tópicos sobre el regionalismo.

Hay, sin duda, un deseo de centralización en muchísimas ocasiones manifestado por la corona; pero esta centralización no implica un desconocimiento de las peculiaridades regionales, y, en las circunstancias dadas en España, es compatible con los fueros. El poder central sigue reconociendo la personalidad de determinadas regiones, a veces en un sentido muy moderno (69), sigue manteniendo muchos fueros y, cuando llega a la abolición de algunos, es después de una guerra que el rey bien puede justificar de rebelión pero de la cual hoy sabemos muy bien su carácter de guerra civil. La lucha de nacionalidades oprimidas por el centralismo para conservar sus fueros (70) es una imagen romántica que poco a poco «a pesar de algunas resurrección— va perdiendo forma; ello no quiere decir que los fueros no tuvieran importancia como un elemento más en la lucha. De todos modos, al defender fueros se defendían

(68) GRAS. *Reiones y autonomías en Europa Occidental desde 1918*. Granada, 1979, pág. 13.

(69) Es el caso, por ejemplo, del marqués de la Ensenada, que dice: «... y porque para se recupere la Andalucía, es menester ayudarla todavía más», *Representación hecha al Sr. D. Fernando el VI por su ministro el —, proponiendo medios para el adelantamiento de la Monarquía y buen gobierno de ella* en «Semanario Erudito», t. XII, pág. 264.

(70) Vid. supra.

privilegios que no eran para todo el mundo. Por las mismas razones, no puede hablarse de una lucha contra los fueros por parte de la corona, esa corona a la cual el fuero le era consustancial. En consecuencia, pienso que ni en la defensa ni en el ataque de los fueros hay una conciencia nacional o subnacional por la sencilla razón de que ninguna clase social llega realmente a ser hegemónica, menos en la región —si se concibe ésta como un poder frente a la corona— que en el estado nacional, pues quienes ostentan el dominio en la región están por lo general bastante unidos al poder del estado.

Con todo no hay razones suficientes para negar una cierta conciencia regional; al menos ésta no es negada por el estado. En la pluma de los políticos de la época aparecen con cierta nitidez algunas regiones, aunque la fisonomía no sea demasiado clara; no podía ser clara, entre otras cosas porque la uniformidad étnica regional jamás está perfectamente delimitada (a no ser que nos ciñamos estrictamente a los límites administrativos, que pueden ser muy poco étnicos) y mucho menos en la España del antiguo Régimen, donde, a las muy difusas divisiones administrativas, se superponen las jurisdicciones señoriales o las circunscripciones eclesiásticas; junto a la diferenciación regional, habría que ver la multitud de préstamos existentes, sin duda, entre las distintas regiones de una misma monarquía. Pero existía además el efecto, siquiera fuera persuasivo, de una política cultural centralizadora —que en muchos casos venía impulsada desde la periferia— de indudable prestigio, a más de necesaria para la gran mayoría de los cargos oficiales, y el efecto disgregador que en el seno de una conciencia regional podían ejercer ciertas categorías sociales, las cuales anteponían (en su propio beneficio) la idea de patria chica, generalmente muy ligada al centralismo, a su conciencia regional.

Ver hasta dónde llega el grado de conciencia regional de ciertas partes de la monarquía española del XVIII es hoy día una cuestión imposible de dilucidar, ya que falta el estudio de la mayoría de los elementos que pueden componer una etnia; quizá el más estudiado sea el de la lengua. En conjunto, puede decirse que el estado favorece el castellano como lengua oficial, o casi, pero que en general fue bastante respetuoso con las lenguas regionales; lógico es que éstas perdieran terreno a lo largo de la centuria. Digamos que el desarrollo económico y las «Luces», especialmente éstas, contribuyeron a la expansión del «buen» castellano y a la disminución progresiva de las lenguas vernáculas; la continua preocupación de los educadores de la Ilustración por la lengua para nada tiene en cuenta las lenguas regionales, o para muy poco, la que se debe estudiar es el castellano, esto es, la lengua nativa de todos los españoles. Claro que la lengua es sólo un elemento étnico. Habrían de verse otros muchos y de qué modo pueden configurar una conciencia regional, cuya influencia será obligado verla en momentos concretos, de acuerdo con períodos determinados de lucha de clases, y siempre en relación a ese estado que se pretende, sin serlo, nacional, aunque es

otra cosa distinta del estado patrimonial —si es que éste había existido alguna vez—.

Pienso, en definitiva, que existió un cierto grado de conciencia regional, favorecida en unos casos y en otros restringida por el poder estatal, que en ningún caso parece oponerse al sentimiento de pertenencia a una común nación de todos los españoles. Las dificultades para su desarrollo, más que del exterior, vinieron en mi opinión el interior mismo de la comunidad regional, que a veces se siente demasiado estrecha en sus límites geográficos (aspira a la nación en un sentido moderno) y a veces siente demasiado grande su ámbito geográfico, sobre todo, a la hora de compartir sus privilegios. En ninguno de los dos casos puede decirse que el estado actuara uniformemente, ni mucho menos que esta uniformidad la sintieran de un modo igual las distintas categorías sociales de una región concreta. No debe olvidarse que conforme avanza la división del trabajo los límites regionales se diluyen cada vez más —aunque hay formas capitalistas para afirmar en una determinada tierra a la fuerza de trabajo, por muy contradictorio que parezca esto—; tampoco debe olvidarse que existen una serie de medios, muchos bastante tradicionales, para mantener en el habitante de cada una de la regiones españolas el amor a «su» tierra (hermandades o gremios), aunque dudo que esta tierra fuera extensiva a una región. En realidad, ante muchos «hechos» de regionalismo español del siglo XVIII, en principio sólo cabe dudar, y ello por dos razones fundamentales: 1) porque muchos hechos se han analizado bajo el prisma de una ideología que nada tiene que ver con la historia; y 2) porque la delimitación de las distintas regiones en el siglo XVIII es muy imprecisa, demasiado imprecisa, como se comprueba al leer la segunda parte de *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, libro al que mucho debe este trabajo; es muy difícil colocar las distintas piezas de este «mosaico» español —y estoy de acuerdo con Jover y Dominguez Ortiz, cuando afirman que su estudio es imprescindible para conocer la sociedad española—, pues las piezas no encajan, quizá porque no se ha definido qué es el regionalismo (y qué puede ser concretamente en el siglo XVIII). Una definición que lógicamente ha de pasar por el estudio pormenorizado de zonas concretas y, desde luego, por la inserción de estas zonas en el conjunto de la nación y del estado; sin esta relación, el concepto de región dice muy poco.

En resumen, puede decirse después de este brevisimo análisis: 1) Que no existe una conciencia nacional en el sentido de voluntad colectiva que le da Gramsci (71), capaz de conseguir un estado nacional; y no existe fundamentalmente porque la clase cuyos intereses puede servir el estado nacional no logra ser hegemónica; 2) que no existe con claridad una conciencia regional mediante la cual se exprese la opresión de una nacionalidad en el conjunto de la monarquía

(71) Vid. *La política y el estado moderno*, 2.ª parte, Barcelona, 1971.

española; 3) que, por el contrario, existe un fuerte sentimiento nacional, formado por elementos muy heterogéneos, en ocasiones francamente reaccionarios, y un cierto sentimiento regional, bastante difícil de precisar en una forma concreta, en el que intervienen muchos factores; 4) que la nación/región no puede verse al margen del estado, cuya peculiar estructura política le exige utilizar todos los resortes posibles con tal de sobrevivir, y al decir todos, incluimos aquellos que le pueden proporcionar la conciencia o el sentimiento nacional o regional; la utilización de estos resortes no es siempre consciente, y 5) finalmente, y esto es lo más importante, que ni la nación, ni la región, ni el estado, están por encima de las relaciones de clase, sino, al contrario, inmersos en ellas; son las relaciones de clase las que modifican viejas categorías políticas y no las categorías las que modifican (o hacen permanecer inalterables) las nociones políticas. De hecho, los tres términos que aquí analizamos no siempre han tenido el mismo significado. Al decir esto, estamos muy lejos de un determinismo economicista; hablo de relaciones de clase en su más amplio sentido, y sé muy bien que el peso de la historia también cuenta para esas relaciones sociales, siempre cambiantes. Las relaciones sociales cambian y con ellas cambian el significado de las palabras. Región y nación no son lo mismo para los hombres del siglo XVIII que para nosotros, pues todo el campo con el que deben relacionarse ha cambiado.